

RUMANIA

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

El escenario político rumano ha atravesado en junio una crisis de una magnitud sin precedentes en los casi 30 años de democracia postcomunista.

El empeño del primer ministro Sorin Grindeanu en no presentar su dimisión, pedida insistentemente por su propio partido, el PSD (el principal partido en el Gobierno), y forzada teóricamente por las dimisiones de los ministros, ha abierto el camino hacia un estreno en la historia de Rumanía de los últimos años. El día 15 de junio, el Consejo Ejecutivo Nacional del PSD decidió presentar una moción de censura contra su propio gabinete, instalado tras la victoria del partido en las elecciones parlamentarias de diciembre, cuando obtuvo casi un 45% de los votos.

Además, el Consejo Ejecutivo Nacional ha decidido castigar su actitud rebelde mediante una expulsión, por lo demás, previsible. La coalición formada por el PSD y la ALDE había retirado el apoyo político a su Gobierno pero, como Grindeanu ha quedado firme, su formación ha tenido que continuar con las decisiones tomadas este jueves. Los líderes de la coalición, el socialdemócrata Liviu Dragnea, el presidente de la Cámara de los Diputados, y el liberaldemócrata Călin Popescu Tăriceanu, presidente del Senado, han afirmado que era necesario cambiar el equipo ejecutivo debido a lo que ha quedado pendiente respecto a la puesta en marcha del programa de gobierno.

La falta de eficiencia es un argumento que Grindeanu ha rechazado tajantemente, ya que los 6 meses que han transcurrido desde la instalación de su Gobierno no han permitido la aplicación de unas reformas más amplias. Además, Grindeanu, nombrado primer ministro por el propio Dragnea, ha denunciado la falta de objetividad y de transparencia en la elaboración, por parte de su partido, del informe de evaluación sobre su actividad. Lo mismo se aplica en el caso de los ministros.

Tras celebrar consultas con los partidos parlamentarios en Bucarest, el presidente Iohannis ha designado al exministro de Economía, Mihai Tudose, para formar un nuevo Ejecutivo. Mihai Tudose fue la propuesta hecha por la coalición gubernamental rumana, integrada por el PSD y ALDE, la misma que ha destituido con una moción de censura a su propio Gobierno.

«Mihai Tudose conoce los mecanismos económicos y tiene la capacidad de gestionar el Ejecutivo», ha asegurado el líder del Partido Social Demócrata, Liviu Dragnea. Los críticos de Mihai Tudose, incluidos los del PSD, creen que éste no sería la persona adecuada para este cargo, recordando que hace tiempo, Mihai Tudose renunció al título de doctor tras ser acusado de plagio. Además, ha habido rumores sobre posibles conexiones entre Tudose

y el Servicio Rumano de Inteligencia. En un comunicado, éste último ha rechazado rotundamente las especulaciones según las cuales esta institución estaría implicada en la designación del primer ministro y ha recalcado que no está implicada en disputas políticas o en otras acciones ajenas a las misiones asumidas en conformidad con el marco legal.

La coalición Partido Social Demócrata-Alianza de Liberales y Demócratas aceleró los procedimientos para que el gabinete de Mihai Tudose se instalara en una semana.

En el nuevo Gabinete repiten 16 de los 27 Ministros que formaron parte del anterior Gobierno. Entre ellos, la Ministra de Trabajo, Lia Olguta Vasilescu.

El equipo de Tudose recibió en su investidura sólo unos 275 de votos a favor, unos 20 menos de lo que había obtenido el Gobierno de Grindeanu, una señal de que no solo la euforia de los ganadores de hace seis meses, sino también la cohesión de la mayoría parlamentaria han empezado a evaporarse. El mismo primer ministro ha afirmado que Rumanía no necesita un Gobierno relajado, sino uno en un permanente estado de alerta. Tudose ha asegurado a los parlamentarios de que sus objetivos son la recuperación de los retrasos en la puesta en marcha del programa gubernamental, afirmando que no quiere « criticar lo que fue, pero entiendo que hubo un freno, y a mí me han dicho que onvierta ese freno en aceleración, y eso es lo que voy a hacer.

El presidente del PSD, Liviu Dragnea, ha afirmado que el programa se debe respetar, indiferentemente de los costes políticos, y que por eso Grindeanu tuvo que irse: «Se cometieron seguramente errores en el Gobierno, pero tuvimos y tenemos el poder y el valor de admitirlo. Lo seguiremos más atentamente, pero al mismo tiempo estaremos aún más cerca de que los plazos del programa gubernamental se respeten.»

Los analistas han destacado que el programa del nuevo equipo ejecutivo difiere mucho del que debería haber puesto en marcha Grindeanu. Se aplazarán una serie de aumentos salariales para los empleados públicos y se ha tomado en cuenta también la introducción de nuevas tasas. El "socio de minoría" del Gobierno, la Alianza de Liberales y Demócratas (ALDE), ha anunciado a través del diputado Varujan Vosganian que apoya de manera condicional al primer ministro.

El voto de la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía (UDMR) ha sido condicionado, según ha precisado su líder, Kelemen Hunor poreal hecho de que «este voto no es un cheque en blanco. No podremos apoyar la introducción del impuesto sobre la cifra de negocios y deberíamos saber a qué se refiere con la tasa de solidaridad, como tampoco el impuesto sobre la renta global no me parece una iniciativa que cambiaría algo para bien.»

La oposición de derecha no ha retenido los sarcasmos contra el poder. Los parlamentarios del Partido Movimiento Popular (PMP) ni siquiera han participado en la reunión del pleno y tampoco en la votación, mientras que

el Partido Nacional Liberal (PNL) ha votado contra la investidura y ha criticado las modificaciones hechas al programa de gobernación.

El nuevo Gobierno se ha instalado anunciando los objetivos que se ha propuesto, y también se ha enfrentado a las primeras manifestaciones.

Aproximadamente 1.000 personas de todas las edades, jóvenes en su mayoría, pero también ancianos y niños, realizaron delante de la sede del Ejecutivo la marcha «Juntos salvamos el país de los corruptos».

«Teniendo en cuenta que cinco meses desde el inicio de las manifestaciones más amplias de Rumanía la corrupción de alto nivel está todavía lejos de ser erradicada, la sociedad civil se está movilizando», han anunciado los organizadores, afirmando que han tomado esta decisión como una reacción a los últimos acontecimientos, como el de poner un límite al abuso de poder.

El 31 de enero de 2017, el Gobierno de Grindeanu adoptó el decreto ley 13, que aplicaba varias modificaciones a los códigos penales, siendo una de ellas la de establecer un umbral de 200.000 lei (casi 44.000 euros) para el delito de abuso de poder. Tras las grandes manifestaciones de Bucarest y del país, el Decreto Ley 13 de derogó mediante otro decreto ley. El Tribunal Constitucional ha decidido recientemente que, verificando las circunstancias en las que se adoptó el Decreto Ley 13, la Dirección Nacional Anticorrupción se arrogó la competencia de efectuar una investigación penal en un ámbito que supera el entorno legal. En base a la decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía, la Fiscalía General decidió cerrar el expediente.

En julio y agosto el Gobierno rumano podrá emitir ordenanzas simples en sectores que no se someten a las leyes orgánicas. Por otro lado, este fin de semana, el nuevo Ejecutivo se ha enfrentado a las primeras manifestaciones. Así, hasta el 1 de septiembre, cuando el Parlamento reanudará su actividad mediante las reuniones en el pleno, el Ejecutivo de Bucarest podrá emitir ordenanzas simples en aquellos ámbitos que no se someten a las leyes orgánicas.

Los documentos emitidos serán de ámbitos tales como el de las finanzas públicas y la economía, el desarrollo regional, la administración pública y los fondos europeos o la sanidad. El Gobierno podrá emitir ordenanzas en cuatro ámbitos del Ministerio de Defensa Nacional, es decir para la ratificación de acuerdos sobre la cooperación en el ámbito de la Defensa, para enmendar la legislación sobre la participación de las fuerzas armadas en las misiones y operaciones desarrolladas fuera de Rumanía, la entrada, la estancia y el desarrollo de las operaciones de las fuerzas armadas extranjeras en el territorio nacional y para la modificación del decreto ley del Gobierno sobre algunas medidas para reducir los gastos públicos y fortalecer la disciplina financiera.

El programa del nuevo gobierno prevé que todas las empresas de Rumanía paguen un impuesto sobre la cifra de negocios en vez del impuesto sobre el beneficio que va a desaparecer. Esta medida entraría en vigor el 1 de enero

de 2018 y las grandes empresas dejarán de pagar el impuesto sobre el beneficio de un 16% que será sustituido por un impuesto sobre todos sus ingresos del 1%, el 2% o el 3%.

El gobernador del Banco Nacional de Rumania (BNR), Mugur Isărescu ha dicho que la institución que dirige analizará detenidamente el programa de gobierno cuando esté ultimado. Con respecto a la intención del Ejecutivo de introducir el impuesto sobre la cifra de negocios que sustituya el impuesto sobre el beneficio, el jefe del banco central ha destacado que esta idea no pertenece a ningún especialista del BNR.

Según Mugur Isarescu, «el impuesto sobre la cifra de negocios es un impuesto que existe en muchos países del mundo. Yo no digo que sea bueno o malo. Las ideas que se le atribuyen al banco central están contenidas en cualquier manual de políticas económicas, así que estas ideas no deben pertenecer a alguien que trabaja en el BNR. Lo importante es quién recepciona estas ideas, cómo las recepciona y cómo las lleva a la práctica».

El primer ministro Mihai Tudose estaría de acuerdo con un impuesto sobre la cifra de negocios para las empresas pero de forma gradual y solo para determinadas actividades, informan fuentes gubernamentales. Según estas, el primer ministro espera los resultados de las simulaciones sobre este tipo de impuesto realizadas por el Ministerio de Hacienda y después tomará una decisión.

En opinión de los expertos esta medida sería perjudicial para los negocios y desencadenaría una cascada de efectos negativos. Además, advierten que la aplicación de una cuota diferencial de impuestos sobre la cifra de negocios puede crear discrepancias de competitividad entre los países que se reflejarán en el precio del producto final, lo que conlleva riesgos importantes. Rumanía puede ser acusada de transgresión de las normas de la competencia.

Los efectos de la imposición de la cifra de negocios de las empresas serán difíciles de soportar por la mayoría de las empresas de Rumanía, sobre todo las que tienen ingresos de más de 1 millón de euros (un 60% de estas tienen accionariado extranjero), tal y como se muestra en un análisis realizado por la Asociación de los Analistas Financieros de Rumanía. Según este análisis las más afectadas por las nuevas medidas serían las de los sectores de la distribución y de la venta al por menor que tienen muchos ingresos con un margen de beneficio bajo.

Este es el primer estudio de impacto de las nuevas medidas fiscales en las condiciones en que ni el Gobierno, ni tampoco los autores del programa de gobierno PSD-ALDE han dado a conocer documento alguno de este tipo.